

La Declaración de Derechos Humanos de 1793

Nazario González

Creemos se puede afirmar que dentro de la riquísima bibliografía sobre la Revolución Francesa, el tema de los Derechos Humanos ha sido uno de los menos favorecidos.¹ Ahora bien, una vez admitida la presencia escasa de tales estudios, observamos que éstos se centran en la Declaración de 26 de agosto de 1789. Parece como si la Declaración elaborada por la Asamblea Constituyente en sus primeros meses de vida pretendiese asumir la total representatividad de los Derechos Humanos adscritos a la Revolución Francesa. Y esto no es correcto, a tenor de los hechos; porque dentro del ciclo revolucionario se produjeron otras dos Declaraciones, la de 24 de junio de 1793 y la de 22 de agosto de 1795. Y consecuentemente, sólo del conjunto de las tres Declaraciones podemos decir que nace la aportación de la Revolución Francesa al tema de los Derechos Humanos. «En justicia, suscribiremos con Marcel Gauchet, el debate abierto en el verano de 1798 sobre el tema de los Derechos Humanos plantea una problemática que persistirá en las versiones siguientes, la de 1793 y la de 1795».²

Introduzcamos ahora, sobre esta visión de las Declaraciones de Derechos Humanos, centrada en el período revolucionario francés, la perspectiva mayor de esa misma Historia de los Derechos Humanos, dotada de autonomía propia, la que recorre y vertebra toda la Historia Contemporánea, desde el último tercio del siglo XVIII hasta nuestros días. Entonces esa triple aportación de la Revolución Francesa a los Derechos Humanos, adquiere un nuevo valor, al poner las bases de las tres actitudes fundamentales que a partir de entonces se producían ante los Derechos Humanos: la burguesa que correspondería a la de 1789, la social que apunta en sus intenciones y se materializa en determinados artículos de su texto, en la Declaración de 1793, y la más reticente, cuando no francamente hostil, asumida por la ideología conservadora, muy afín al espíritu y aún a la letra que animó la Declaración elaborada por el Directorio en el verano de 1795.³

De ahí la importancia de estudiar cada una de ellas separadamente; más todavía las más desatendidas que son como hemos dicho las de 1793 y

1795. Vamos pues a centrarnos en este trabajo en la primera de las dos, la de 1793.

Nos aproximaremos a ella, en primer lugar, *Históricamente*, intentando seguir su complejo proceso de elaboración desde la puesta a punto de la Comisión que la elaboró, en septiembre de 1792 hasta su final aprobación en junio de 1793. Con ello no sólo realizaremos un primer conocimiento de la Declaración en sí, sino que arrojaremos un foco de luz y desde un nuevo ángulo a ese período siempre complejo del ciclo revolucionario francés que va desde el nacimiento de la Convención a los prolegómenos del Terror.

Una vez allanado, por decirlo así, el camino histórico, podremos abordar mejor el texto mismo de la Declaración *Morfológicamente*. Efectivamente, la Declaración de 1793 no es ni una reiteración más de los Derechos Humanos, con ese aire de cantilena repetitiva que algunos han querido ver en sus insistentes versiones, ni un mosaico disperso de tendencias ideológicas, a tenor de las diversas manos que como veremos van a intervenir en su elaboración; sino que posee una razón de ser, un orden interno, que regula y explica los distintos bloques que la integran.

Finalmente, y desde un punto de vista *Formal*, la Declaración de 1793 nos ayuda a aclarar un punto importante en la historia de los Derechos Humanos, el de su relación con el texto constitucional al que desde sus orígenes, tras vencer algunas indecisiones y posiciones contrarias, acostumbraron a ir unidos. La Declaración de 1793 contribuirá decisivamente a afianzar esta vinculación; pero al mismo tiempo y sin que ello implique una contradicción, contribuirá a fijar las diferencias entre ambos textos, Declaración de Derechos y Constitución.

Pensamiento y acción en la Declaración de 1793

Comencemos por lo primero, por su historia interna.

El 29 de septiembre de 1792 la recién nacida Convención puso en marcha la maquinaria de unas comisiones de trabajo que ya habían dado pruebas de su eficacia desde la primera Asamblea Constituyente.⁴ Y la primera de todas sería la Comisión de Constitución. Tras los trámites normales de presentación de candidaturas y votaciones, el 11 de octubre de 1792 se conocieron ya los nombres de sus nueve miembros. Eran Jacques Brissot (quien sería pronto sustituido por Charles Barbaroux), el ya histórico alcalde de París, durante la Primera Revolución, Jérôme Petion, el tandem bordelés-girondino compuesto por Pierre Vergniaud y Armand Gensonné, el difícilmente definible Bertrand Barère de Vieuxac, que estará presente y desde posiciones contrarias en momentos decisivos de la elaboración del texto, la curiosa personalidad del inglés Thomas Paine, representante del ala radical inglesa favorable a los Revolucionarios franceses y los nombres mayores de Joseph Sièyes, George Danton y Marie Antoine de Condorcet.

Este es el dato puntual, lugar común en cualquier historia de la Revolución, sobre el que nosotros vamos a dejar caer estos tres puntos de análisis que nos introducen ya de lleno en el objeto de nuestro estudio.

1. No podemos pasar por alto, en primer lugar, el hecho mismo de la creación de un Comité de Constitución, destinado a redactar un nuevo texto fundamental, cuando sólo habían transcurrido tres años escasos desde la entrada en vigor de una Declaración de Derechos y de una Constitución largamente elaborados y que había introducido profundos cambios que aún estaban en gran parte por verificar en la vida política francesa. Rápidamente nos sale al paso, para explicar esta anomalía, la tesis de la doble Revolución, admitida en la historiografía de la Revolución; esto es, que a partir de agosto de 1792, Francia realiza una Revolución sobre su propia Revolución; dicho de otro modo, y apurando el planteamiento hasta su extremo, que para los Convencionales de septiembre de 1792 la Francia monárquico-constitucional de 1791 hacía figura de Antiguo Régimen respecto al nuevo curso mucho más avanzado por el que se proponían llevar en adelante la Revolución. Pero hay otra explicación, convergente en sí con ésta, pero derivada de la naturaleza de los Derechos Humanos, cuyos principios eran ya el pilar fundamental de la Revolución de 1789 y se daba por asentado habrían de serlo también de esta nueva. Desde cualquiera de las dos perspectivas, la lockiana que alimentó más directamente la Declaración de Virginia y la rousseauiana que inspiró la de 1789, el concepto de Pacto era esencial para la nueva Doctrina de los Derechos Humanos que había comenzado a explicitarse en el mundo occidental desde el último tercio del siglo XVII. Pues bien, lo que había sucedido en el verano de 1792, lo que creaba una fosa difícilmente salvable entre el mundo regido por la Constitución de 1791 y el que como una gran página en blanco se abría ante los revolucionarios de septiembre de 1792, era que el Pacto se había roto. La traición consumada del Rey le desautorizaba como su primer firmante, históricamente hablando, y depositario de uno de los tres Poderes, descolocando con ello a las demás piezas del edificio constitucional. Se volvía otra vez a la hipótesis primera del estado de naturaleza, desde la que había que intentar un nuevo proyecto de sociedad civil, justamente el proyecto constitucional encomendado a la Comisión. Como si fuese una justificación inconsciente, es frecuente una y otra vez a la hora de presentar o defender los diferentes proyectos de la nueva Constitución, recaer en esta idea. «Os presento, dirá M. A. de Condorcet, al presentar su proyecto el 15 de febrero de 1793, el nuevo pacto social tan universalmente deseado, tan impacientemente esperado».⁵

Y meses adelante, el diputado Henri Isnard en una de las múltiples sesiones en las que se discutió el tema constitucional, la del 10 de mayo de 1793, intentará profundizar sobre el concepto mismo de Pacto Social, al insistir en que no podía asentarse en «la voluntad de una mayoría que comprometa a la sociedad entera», sino que debía «abarcar y comprometer desde sus orígenes mismos a todos los miembros de la sociedad».⁶

2. Notamos en segundo lugar que este Comité Constitucional es el primero en el tiempo y el más trascendental por su cometido de los que se crean en la citada fecha de 29 de septiembre, tras las recién celebradas elecciones para la nueva Asamblea. De ahí por una parte el interés por acceder a él. Lo intentó Robespierre, pero no alcanzó el número suficiente de

votos. Rechazo que explica en parte su postura hostil al proyecto salido de la Comisión. De Condorcet nos dice L. Cohen que «Il souhetait passionnement d'être admis». Al igual que Sièyes que fue quien obtuvo un mayor número de votos.⁷ Pero además una vez formada la Comisión automáticamente se convirtió en motivo de conflicto entre los dos bandos que ya habían reñido sus primeras armas, en la etapa de Monarquía Constitucional. «La santa armonía» a la que se refería Danton al reflejar el ambiente de mutua reconciliación que iniciado en la jornada del 10 de agosto había alcanzado su clímax en los días que siguieron a Valmy, quedó bruscamente rota nada más conocerse el resultado de la votación. Georges Couthon, «el doble de Robespierre» (J. Michelet), diría ante el Club de los Jacobinos en su sesión del 12 de octubre: «Ved la composición del Comité de Constitución; es lo que ha hecho que caiga la venda de mis ojos. Se meten en todos los puestos... ese, ese partido (los girondinos) compuesto de gentes sutiles, intrigantes y sobre todo extremadamente ambicioso... Su objetivo es copar todos los puestos y sobre todo los puestos de la República».⁸ Reanudadas así las hostilidades a cuenta del Comité de Constitución, el texto de la misma, sus vicisitudes internas y plazos de aprobación no dejarían ya de ser uno de los campos favoritos de lucha entre la Montaña y la Gironda, hasta su aprobación final que sintomáticamente coincidirá con la derrota definitiva de la Gironda en junio de 1793.

3. En tercer lugar, estaba el problema de la presidencia de la Comisión. La experiencia de entonces y de hoy demuestra la importancia que en este tipo de comisiones reducidas tiene su Presidente. Dos nombres se la podían disputar y de hecho, al menos en principio, se la disputaron: J. Sièyes y M. A. Condorcet. Ambos estaban sobrados de prestigio revolucionario y de saber constitucional. Salió elegido Condorcet. Su republicanismo de primera hora, cuando muchos de los Convencionales de hoy aún apostaban por la Monarquía, fue ya un importante aval a su favor. Era además el último gran representante del Pensamiento de la Ilustración, generador de tantas incitaciones y soluciones concretas como habían sido asumidas a lo largo de los tres últimos años por la Revolución. A pesar de su talante intelectual y distante, al que enseguida aludiremos, había contado con un notable éxito en las recientes elecciones a la Convención. Había salido elegido por cinco distritos; Sièyes solamente por tres. Contó además dentro de la comisión con el apoyo de la minoría jacobina que aún veía en él un posible aliado, con la amistad incondicional de Th. Paine, y si queremos apurar el planteamiento, con la connivencia del mismo Sièyes quien con esta renuncia explícita iniciaba una táctica de retraimiento que mantendría a lo largo de toda la Convención y le reservaría —aquel histórico «j'ai vécu»— para los momentos decisivos de la transición al Régimen Napoleónico.⁹

El proyecto Condorcet

Condorcet se entregó de lleno a su trabajo. Fue él el principal artífice del proyecto constitucional; sería la obra de su vida. Para finales de diciembre ya

tenía terminado su trabajo que fue aceptado salvo pequeños retoques por la Comisión. Pero no nos adelantemos. Porque es el momento de recordar que la recién creada comisión había tomado la iniciativa de abrir un turno de consultas a nivel nacional e internacional que aportaran cuantas ideas y proyectos parecieran útiles; así se conseguiría un texto lo más universal y perfecto posible. Las palabras de B. de Barère ante la Convención, el 19 de octubre, fueron suficientemente claras: «El Comité ha pensado que tenía que rodearse de todas las luces, interrogar por doquier al genio de la libertad... recoger los beneficios de la libertad de prensa... convocar a todos los ciudadanos para que concurran más particularmente a la redacción del nuevo pacto social... La constitución de una República no puede ser la obra de unos pocos espíritus sino la obra de todo el espíritu humano.» Y concluía: «Vosotros habéis nombrado una comisión de nueve miembros, pero todo aquél que en el seno de la Convención, en Francia, en Europa, sea capaz de trazar un plan de constitución republicana y de poner por escrito la forma de desarrollarla, es también miembro de la Comisión»¹¹

Excelente idea, en sí. Con ella se recogía una tradición que por lo que respecta a lo que había de ser el gran pórtico de esa Constitución, la Declaración de Derechos, la detectamos desde sus primeros orígenes: su voluntad de universalidad.¹² Pero también tuvo otra consecuencia de carácter práctico, ésta ya mucho menos positiva: se imponía al texto un primer factor de retraso. La Declaración de 1793 no tendría ya, como la de 1789, la frescura y el vigor propios de un texto nacido de un debate concentrado, abierto al calor de los primeros días de la Revolución (de la Segunda Revolución, en el sentido que antes dijimos). Y una vez encajado este primer retraso, ya no sería difícil endosarle otros, más o menos justificados, como hemos de ver; porque la Montaña aprovechará estos plazos para retrasar en una primera fase lo más posible la aprobación de una Constitución que conllevaría unos nuevos comicios en los que muy posiblemente disminuiría sus efectivos en relación con los conseguidos en las precipitadas elecciones de septiembre y terminará en el último tramo del proceso constitucional, por hacerse con su autoría, cuando menos oficial y formal.

El segundo factor de retraso, exterior a la elaboración interna del documento, pero perfectamente lógico, fue el proceso del Rey. Era natural que absorbiese toda la atención de la Convención desde el 7 de noviembre de 1792 en que se abrió el debate hasta el 21 de enero de 1793, en que Luis XVI subió a la guillotina; más la resaca podemos añadir que dura el resto del mes de enero y primera semana de febrero, de reacciones internas (dimisión del Ministro del Interior Rolland) y condenas internacionales, estas últimas con la consecuencia inmediata de una Declaración de Guerra de Inglaterra (1 de febrero) que poco después daría pie a la formación de la primera Gran Coalición.

Precisamente dentro de este contexto histórico, los Girondinos van a apuntarse una victoria, bien pírrica es cierto, al Conseguir que la Convención ponga de nuevo en el primer plano el tema constitucional: se imponía, fue su argumento, fortalecer institucionalmente el Régimen, cara a

las dificultades externas y también internas que se avecinaban. Se fijará así la fecha del 15 de febrero para que Condorcet, como Presidente de la Comisión, presente públicamente el proyecto.

La intervención de Condorcet no tuvo éxito. Razones formales en primer lugar: Condorcet es un mal orador. Se le oye mal. Se cansa. «Condorcet, fatigué, cède sa place a Barère», anota puntualmente el diario de la sesión.¹³ Sucede, además, que sin que conozcamos la razón exacta, B. Barère cede la tribuna dentro de la misma sesión a A. Gensonné quien al no poder terminar la lectura en el día, continúa con su exposición en la mañana del 16. Demasiadas interrupciones y voces ajenas para dar vida a un discurso, además de prolijo, denso y razonado como correspondía a un filósofo del XVIII. Fue un flanco por el que pronto lo atacó la oposición. «Me ha parecido, argüiría finalmente Saint Just, que el Comité ha considerado la voluntad general desde el punto de vista intelectual... La libertad no debe estar en un libro, debe estar en el pueblo».¹⁴ Y en la misma línea G. Couthon, refiriéndose concretamente a los Derechos del hombre, a los que calificará de «una abstracción afectada».¹⁵ El que podríamos denominar discurso social jacobino que irá enriqueciéndose con nuevas aportaciones en los meses siguientes, ha comenzado por abrir brecha en un Proyecto Constitucional al que se le considera fiel reflejo de la facción opuesta a las bases populares encuadradas en las secciones parisinas y en las Federaciones de provincias. Y desde estos grupos viene precisamente a cerrarse esta crítica social, al proyecto recién presentado. «Hay que ahogar a esta criatura en la cuna», dice una de estas asociaciones populares, la denominada «Los Defensores de la República una e indivisible»; porque es, añaden, «una Constitución montada toda ella para favorecer al rico contra el pobre».¹⁶

Pero había otra razón de índole más personal para explicar esta fría acogida que desembocará en una auténtica guerra al que bien podríamos llamar ya Proyecto Condorcet. El Condorcet que sube a la tribuna en aquella mañana de febrero, no es ya la personalidad indiscutida de las primeras semanas de la Convención. Es un políptico devaluado. La Izquierda no le perdona que fuera uno de los catorce que se abstuvo en la votación sobre la condena a muerte del Rey. No importa que su postura no tuviera nada que ver con el rescoldo monárquico de sus compañeros de voto. Su único argumento fue su oposición frontal a la pena de muerte, cualquiera que fuese el inculpaado. Pero precisamente a través de esta votación quedó de manifiesto, con una especial claridad, la personalidad política de este personaje al que bien podemos calificar de singular en la Historia de la Revolución. Efectivamente, sólo Condorcet, entre los Ilustrados de primera fila, traspasó con su biografía la raya de 1789 y se introdujo de lleno en el torbellino de la política revolucionaria. Pero sin renunciar nunca a su genuino talante intelectual. Se lo disputaron las dos facciones y cada una creyó en su momento que lo tenía de su lado. Pero en cualquier revuelta del camino se erguía el filósofo principalista e independiente, liberal, pero con una mano tendida al pueblo. Su republicanismo a toda prueba, su defensa de la igualdad racial y su posición en favor de la mujer le aproximaban a las

tesis jacobinas, mientras que su repulsa a la manipulación del pueblo con fines políticos, su defensa de las libertades públicas que veía conculcadas día a día por el Comité de Seguridad y a partir de abril por el Comité de Salud Pública, le hacían pasar por un girondino más, ante la opinión, no ante los convencionales adscritos a este grupo de los que se distanció en múltiples ocasiones, una especialmente significativa en la votación del 28 de mayo, en la que alineado con Danton y Cambacères, Condorcet vota contra el restablecimiento de la Comisión de los 12 propuesta por la Gironda, para cerrar el paso a la Insurrección, aquella por cierto que desencadenada al fin en las jornadas del 30 de mayo y 2 de junio, habría de arrastrarle a su proscripción y posterior muerte.

Desde el ala conservadora le juzgaría así, pasado el trauma del Terror, en 1795, el publicista J. P. Gallais: «Fue un filósofo equivocado que desertó de los altares de la sabiduría para incensar el ídolo de la libertad».¹⁷ Y en el otro extremo, su compañero de Comisión B. Barère, que siguiendo caminos más tortuosos sobrevivió al Terror con el que se identificó en los peores momentos, le dedica en sus Memorias este elogio: «Después de Sócrates no ha habido un filósofo tan bienhechor de los demás, tan tolerante, tan amigo de la humanidad y protector de sus derechos. Autor de un proyecto de Constitución, demasiado elevado en sus miras, demasiado severo en su disposición, para un pueblo que vivía en los albores de la Revolución, Condorcet, concluye el «Anacreonte de la guillotina», fue un incomprendido entre los personajes de su época».¹⁸ Y a mitad de camino uniendo a su intuición de mujer el resabio que le podía quedar de la enemistad que hubo entre Condorcet y su marido, escribirá Mme. Roland, también en sus tardías Memorias: «Su verdadero puesto estaba en la Secretaría de la Academia de Ciencias... Si con su espíritu se situaba en el nivel de las más altas verdades, en su carácter dominaba el miedo (?). Era una fina inteligencia, pero empapada en algodón... uno de esos hombres en fin a los que hay que hacerles que escriban, pero no que actúen».¹⁹ Tal vez no todos pensaban lo mismo que la seductora señora de la Platerie, entre otros el que fuera su mejor maestro, D'Alembert, quien definía a Condorcet como «un volcán cubierto de espuma». Condorcet pertenecía a esa raza de hombres que sólo hunden las raíces de su energía en el pensamiento. A su tiempo lo hemos de ver probado. Pero de momento es válida la conclusión provisional de que el hombre-Condorcet asume una buena parte del primer rechazo y si queremos también de los próximos contratiempos que sufrirá el iniciado proceso constitucional.

Hacia un proyecto Jacobino de Derechos Humanos

Tres datos bien concretos van a marcar el nuevo curso, que tras este primer tropiezo va a seguir el proyecto constitucional. El mismo día 16 de febrero, en que Gensonné termina de leer el largo informe presentado por Condorcet, un girondino de primera hora pero ya enrolado en las filas de la Montaña, A. Jeanbon Saint-André, se apresura a recordar un decreto de la

Convención según el cual «el Comité de Constitución debía quedar disuelto a partir del momento en que el proyecto por él elaborado fuese presentado a la Asamblea».²⁰ Así se hizo, con lo que el proyecto quedaba de algún modo abandonado a sí mismo, a merced de las críticas crecientes de la prensa, los clubs, y las secciones populares.²¹

En segundo lugar, también ese mismo día, se hizo mención de otra moción que presentara en el momento mismo de ponerse en marcha la creación de la Comisión, el 29 de septiembre, Jacques Rabaut-Pomier, un diputado que ha pasado a la historia más por sus aportaciones a la medicina que como político, según la cual el proyecto de Constitución no podría ser discutido «sino por lo menos dos meses después de haber sido presentado, a fin de que pueda ser examinado por cuantos en Francia y en Europa pertenecen a la clase de hombres instruidos y libres; fue, concluyó, el defecto que tuvo la Constitución de 1789».²² Era, como se ve, un matiz distinto de aquella consulta universal propuesta el 11 de octubre por B. de Barère. Allí se pedían ideas para un texto constitucional, aquí opiniones, y en su caso críticas, sobre el proyecto ya presentado. Pero el resultado sería el mismo: una nueva cuarentena impuesta a la Declaración de Derechos y Constitución subsiguiente.

Y tercer dato: dos días después de la lectura, el 18 de febrero, François Anthoine, un jacobino de primera hora, perseguido en los días de la Legislativa por su maximalismo revolucionario, toma la palabra en el Club de los Jacobinos para instar a sus miembros a que no dejaran de la mano la oposición al proyecto que acaba de darse a conocer y para proponer, «como la mejor censura al mismo, presentar uno mejor. Porque en otro caso, subraya, se nos acusaría de no querer una Constitución».²³ Y así se hizo. Aquel mismo día se formó una comisión jacobina, destinada a seguir minando ante la oposición el Proyecto Condorcet y preparar a su vez un texto alternativo. Fueron sus miembros Jeanbon Saint-André, Robert, Tourion, Bentabole, Robespierre, Billaud-Varenne, Anthoine y Saint-Just; y como suplentes, A. Cloutz y Couthon. Los primeros días de abril cogieron por sorpresa a una Convención que desde mediados de febrero pasaba por uno de sus momentos más difíciles: mientras que en las provincias se oponían a la Conscripción se multiplicaban las derrotas en los frentes y empeoraban las condiciones de vida de las clases populares, sobre todo en las grandes ciudades. Se habían cumplido los dos meses prescritos y que recordara Rabaut-Pomier y la Gironda exigía que se retomara el tema constitucional.

Y así fue; a partir del día 15 se fijó un calendario de fechas para entrar en su discusión. ¿Pero sobre qué texto? A la Convención habían ido llegando desde el mes de octubre numerosos proyectos enteramente nuevos que unidos a las enmiendas más puntuales al proyecto de Condorcet, llegaron a sumar trescientos textos diferentes.²⁴ Y esto supuesto, ¿quién haría la selección previa, que puesta a votación en la Asamblea permitiera iniciar el debate partiendo de un solo texto? Desaparecida la Comisión primera se imponía crear una nueva. Y así se hizo; y sólo uno de sus miembros entró a

formar parte de ella: B. Barère. Condorcet quedó excluido. Doloroso, aunque esperado rechazo, por lo que acabamos de explicar, que se trocó en triunfo cuando en la sesión del día 17 de abril el girondino P. J. Cambon consiguió que la Asamblea adoptase como documento base para su discusión el propuesto en su día por nuestro filósofo. Para ello se sirvió de una hábil argumentación: frente a la dispersión y a veces inanidad de esos tres centenares de propuestas, la de Condorcet tenía al menos el mérito de una coherencia interna y de una riqueza de ideas, aquella que sus adversarios habían calificado de densidad. Y en segundo lugar, la experiencia de 1789 daba que el texto base no era más que un punto de partida que los diputados se encargarían de enmendar, hasta hacerlo irreconocible.²⁵ Pero nuevo avatar de este original proceso constituyente. No sucedió así. Con rapidez y fluidez inesperadas fue aprobando la Asamblea los treinta artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pórtico de la reglamentación constitucional, o «Constitución madre», como les llamó en la sesión del día 17 el diputado J. B. Salle.²⁶ Sólo los artículos V y VI, referentes a la libertad de prensa y a la libertad de cultos, tropezaron con sendos leves obstáculos pronto superados. Es indudable que influyó en esta fluidez la preocupación ante las derrotas en el exterior e inestabilidad interior; era preciso cerrar filas e institucionalizar cuanto antes a la recién nacida República. Pero una intervención de P. L. Bentabole, ante el club de los Jacobinos, el 18 de abril, nos ofrece otra importante clave de explicación. De las filas de la Montaña se estaba extrayendo la práctica totalidad de los «Comisarios de Misión» que sobre todo a partir de la traición de Dumouriez (31 de marzo) se esparcían por todo el territorio francés, para mantener en su pureza el espíritu revolucionario²⁷; ello suponía que faltaban los diputados — Bentabole da la cifra exacta de 113 — que más podían oponerse al proyecto. Había con todo una minoría que montaba guardia. Aquella comisión jacobina creada el 18 de febrero se dispuso a interrumpir la marcha triunfal del proyecto constitucional, atajándolo en su misma raíz, antes de que ésta se asentara, es decir, en la Declaración de Derechos que a última hora de la tarde del jueves 22 de abril había llegado al penúltimo artículo del Proyecto Condorcet, el 29. Seguramente, Robespierre pidió la palabra. No la tomaría el 23, ocupada la Asamblea en otros temas puntuales; pero sí el 24, en una memorable sesión. Es el día en que Marat entra triunfante en la sala, libre de la acusación de promover la insurrección que contra él quisieron levantar los Girondinos. Se advierte además que la intervención de Robespierre se encuadra dentro de una operación de mayor alcance; porque en la misma sesión intervienen los jacobinos Saint Just y Anarchasis Clootz, G. Romme y J. B. Harmand.

La intervención de Robespierre

Pero la Intervención más sonada es sin duda la de Robespierre. Robespierre se centrará exclusivamente en la Declaración de Derechos.

«He pedido la palabra, en esta última sesión, comenzará diciendo con cierto despego, para proponer algunos artículos adicionales en relación con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y os voy a proponer en primer lugar algunos artículos que juzgo necesarios para completar vuestra teoría de la propiedad». Y rompe a continuación en uno de sus clásicos exabruptos que tanta impresión solían producir en el auditorio: «que nadie se alarme, almas de cieno que no estimáis más que el oro, yo no voy a tocar vuestros tesoros por más impuro que sea su manantial». Y después de una digresión histórica, llega al punto central de su intervención: «Al definir la libertad el primero de los bienes del hombre, el más sagrado de sus derechos derivados de la Naturaleza, vosotros habéis dicho con razón que tenía como límites la libertad de los demás. ¿Por qué no aplicáis ese mismo principio a la propiedad que es una institución social?». ²⁸

El argumento no tenía réplica, y haciéndose fuerte en él, propone cuatro nuevos artículos que sustituirían al artículo 18 del proyecto de Condorcet: propiedad supeditada a la ley, propiedad limitada por los derechos fundamentales de los demás y en concreto por su mismo derecho a la propiedad y condena de cualquier acto que vulnerase estos principios.

Una vez dado con éxito este primer asalto, Robespierre continúa sin salirse del tema atacando el Artículo 22 del proyecto de Condorcet que establecía la obligación de todos a contribuir al gasto público y echa una capa de protección sobre las capas más indigentes pidiendo que sean dispensadas de cualquier impuesto. Sigue ganando terreno y entra seguidamente en un campo enteramente distinto, pero muy sensible para el patriotismo revolucionario que vivía horas decisivas. «El comité, dice Robespierre, ha olvidado el deber de recordar los deberes de fraternidad que unen a todos los hombres de todas las naciones...» Renace así el tercer lema algo postergado de la Revolución, ahora con la connotación muy particular de que esta unión entre los hombres y los pueblos signifique una especie de gran cruzada contra la tiranía allí donde se encuentre. Exactamente los que serían los tres últimos artículos de su Proyecto íntegro de Declaración. Porque hacia allí se dirige Robespierre. Puesto que la Cámara ha seguido con muestras de aprobación sus críticas puntuales al texto del 15 de febrero, se atreve a proponer un proyecto completo y alternativo al de Condorcet. «Ciudadanos, tendríais otros artículos que proponeros... Si quiero obtener vuestro sufragio en toda su extensión sería necesario que me permitiérais leer este Proyecto». Y pasa a leer los treinta y siete artículos de que constaba su Proyecto. «Vivos aplausos, nos dicen las actas, subrayan su discurso».

La calculada intervención de Robespierre, orquestada por sus compañeros de la Montaña, llevará consigo un nuevo retraso en la elaboración del definitivo texto. La Asamblea ha de darse tiempo para examinar las innovadoras propuestas de Robespierre y en definitiva ha de contrastar los dos documentos y optar por uno de ellos. Insiste además J. A. Thuriot, ya el 26 de abril, en el argumento de que no conviene discutir un tema tan decisivo para la República, cuando están ausentes muchos jacobinos en sus tareas de «Misión». ²⁹ De poco sirve que un grupo de girondinos replique a esta objeción con gritos de «a la Constitución, a la

Constitución», porque los urgentes problemas que ha de afrontar la Convención —Ley del Maximum del 4 de mayo, contraofensiva de la Vendée— terminan por poner bastones en las ruedas a la discusión constitucional.

En este impasse se entiende la intervención de Condorcet el día 13 de mayo. Sería la última vez que subiría a la tribuna de oradores. Cara a su destino final que ya prevé, Condorcet se crece. Frente al retraso indefinido Condorcet exige un plazo fijo: o el 1º de noviembre la nueva Constitución está ya en manos de las Asambleas primarias, para su aprobación, o la Convención tiene la obligación de convocar nuevas elecciones que traigan a la Asamblea unos diputados capaces de dar a Francia una Constitución. Un gran tumulto sigue a sus palabras; se le acusa de reaccionario.³⁰ En una visión más amplia, la intervención de Condorcet sólo sirve para alimentar aún más la tensión entre las dos facciones rivales. Esta romperá al fin cuando los girondinos soliciten de la Asamblea el día 22 nada menos que la disolución de la Commune de París y del Club de los Jacobinos. La reacción fue la llamada a la insurrección por parte de la Montaña a las secciones de París. Ésta se produce y surte su pleno efecto en las célebres jornadas del 31 de mayo y el 2 de junio, cuando una Convención mermada en sus efectivos y atemorizada por la presión del pueblo de París que desbordaba el edificio, vota el arresto de la minoría más combativa de los diputados girondinos.

El proyecto del Comité de Salud Pública

En la paz, si no de cementerio, sí de represión que acompaña a la victoria jacobina del dos de junio, le llega su nueva y última oportunidad al proyecto constitucional. Pero ahora ya desde unos presupuestos de procedimiento totalmente diferentes. De procedimiento, porque el encargado de elaborar el nuevo proyecto no va a ser una comisión elegida en el seno de la Convención, sino una llamada «Comisión Auxiliar», formada por cinco de los nueve miembros que forman el Comité de Salud Pública, esa institución atípica y paralela al poder ejecutivo aunque con poderes omnímodos nacida en los primeros días de abril.³¹

Cambio también en el planteamiento. El omnipresente B. Barère nos ofrece en sus Memorias una buena síntesis del mismo: puesto que urgía tener una Constitución, lo conveniente era «reducirla al menor número de artículos»; de este modo se conseguiría aprobarla, ya que «sería más fácil unificar las opiniones» y una vez aprobada «se quitaba todo pretexto a las pasiones anárquicas». ³² Por lo demás no era difícil desde la altura del vencedor arrojarse un puñado de barro con visos de síntesis histórica sobre todo el camino recorrido hasta entonces. Una circular enviada por el Club de Jacobinos a sus sociedades filiales nos desvela mejor que ningún otro documento la visión jacobina de la nueva situación: «Desde hace mucho tiempo, se dice en él, el pueblo esperaba una Constitución... pero hasta el 31 de mayo no la había podido obtener. Brissot, Petion y sus cómplices, encargados de presentar este trabajo a la Convención no lo habían hecho

todavía. Acusaban a la Montaña de obstaculizar sus tareas; sin embargo, apenas fueron objeto de un Decreto de arresto cuando ocho días después esta sublime Montaña presenta a Francia entera como única respuesta a esos viles calumniadores una Constitución basada en la libertad y la igualdad». ³³

Tras una discusión según el procedimiento de urgencia, en nuestro actual lenguaje parlamentario, Declaración de Derechos y Constitución fueron aprobados entre los días 23 y 24 de junio de 1793. El día 23 se dedica íntegramente al primero de ellos, a la Declaración de Derechos. Sólo hubo una propuesta de enmienda, la de Nicolas Raffron, un abogado parisino que ya preparaba su paso desde las filas de la Montaña en las que ahora militaba a la derecha dura en el período de Thermidor: quería introducir el término y el concepto de «Deberes» en el encabezamiento de la Declaración. Robespierre replicó rápidamente, afilando su daga, al recordarle que su actitud le recordaba la del Clero que había querido introducir esta misma enmienda en la Declaración de 1789. No se habló más.

Cuando llegó la hora de votar, la Derecha —lo que quedaba de ella— mantuvo un silencio que equivalía a una condena. Fue entonces cuando Jacques Billaud-Varenne, aquél que había calificado las matanzas de septiembre de «venganzas nacionales», sintió que le bullía dentro el hervor del más puro jacobinismo y solicitó la votación nominal. Pero terció de nuevo Robespierre, maestro consumado en adueñarse de los destinos de la Asamblea: «La aprobación, dijo, es un asunto tan claro que es imposible pensar que nadie pueda oponerse a ella». Y añadió, con una seca ironía: «será que están paráliticos» (y por eso no pueden moverse). ³⁴ Es evidente que Robespierre temía la votación y en concreto el contagio que el silencio de la Derecha podía producir sobre la siempre despreciada por la Montaña, pero también temida, «Llanura». En medio de efusiones y cantos de alabanza nacía al fin para Francia y para la Historia Universal una nueva Declaración de Derechos Humanos.

Pero alguien había de alzar su voz con una especial firmeza contra aquel éxito repentizado. Antes de que terminase el mes corría entre los diputados de la Convención un escrito de M. A. Condorcet, bajo el título «Carta a los ciudadanos franceses sobre la nueva Constitución». Aquí ya se lo jugaba todo: «se ha trabajado sobre un proyecto redactado a toda prisa por un comité nombrado por el Comité de Salud Pública... Ha sido aprobado en un momento en que no había una verdadera representación nacional... Con la Convención cercada por las tropas, la libertad de prensa suprimida...». ³⁵ Era su condena a muerte. El 8 de julio, a petición de P. J. Cambon, la Convención decreta la detención del ciudadano Condorcet.

La morfología interna de la Declaración de 1793

Hasta aquí la accidentada historia de la Declaración de los Derechos Humanos en el conjunto del texto constitucional que había de regir la vida de la joven República. Ahora nos corresponde introducirnos en su estudio interno.

El legado de 1789

Apreciamos en primer lugar el legado de la Declaración de 1789. Dicho en otros términos: la Declaración de 1793 no es enteramente original. Porque si es cierto que sus autores se sentían muy alejados de los planteamientos del bienio de 1789-91, también lo es que aceptaban las metas que entonces se consiguieron como el punto de partida indispensable de su nueva Revolución. Con el mismo énfasis con que B. Barère marcaba distancias al decir desde la tribuna de la Convención aquello de «hasta ahora no habíamos llevado a cabo más que la Revolución de la Libertad; ahora hemos logrado la Revolución de la Igualdad», añadía: puesto que hemos hecho hallazgos nuevos en los Derechos del Hombre, es preciso que los consignemos en una nueva Declaración».³⁶ Que era como decir: la nueva Declaración es un paso más sobre la anterior; se respeta lo ya construido; ahora sólo añadimos un nuevo piso al edificio. Así es como vemos se conserva aquel célebre Preámbulo de la Declaración de 1789, solemne y cargado a la vez de ideas, ahora, es cierto, algo resumido y con un último tirón robesperriano que veremos en su momento. No se han perdido tampoco, aunque advirtamos cambios formales en el orden y desde luego en la numeración, aquellos derechos básicos que, en la Declaración de 1789, ocupaban los seis primeros artículos y aquí se extienden entre el artículo 1 y el 9. Pasan asimismo prácticamente intocados de una a otra Declaración, los Derechos en materia penal (Artículos 7, 8 y 9 de la Declaración de 1789 que con una redacción más fragmentada se proyectan claramente sobre los Artículos 10-16 de 1793). En algún caso, como en el Artículo 9 de la Declaración de 1789 cotejado con el 11 de la Declaración de 1793, la copia es enteramente literal. Asimismo aquel Artículo 17 de la Declaración de 1789 sobre la propiedad, que los Constituyentes de antaño añadieron a última hora por iniciativa de A. Duport, es recogido en el Artículo 19 de la nueva Declaración, en su segunda parte que es la importante, la que atañe a las consecuncias del derecho «sagrado» e «inviolable a la propiedad ya que «nadie, se dice en ambos textos, puede ser privado de ella, si no es cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exige claramente y con la condición de una indemnización justa y previa».

La aportación de Condorcet

Pero sobre este primer depósito comienza a resaltar en la Declaración de 1793 un triple estrato, ya enteramente novedoso. Y el primero no sólo atendiendo a la génesis histórica, sino también al volumen y a la importancia del contenido es el de Condorcet. Sí, el derrotado Condorcet, el que fue apartado de la Segunda comisión, la del 4 de abril, el que asistió en silencio y con amargura a las sucesivas marchas y contramarchas de su proyecto, el

que criticó duramente el definitivo texto aprobado el 23 de junio, tiene el honor histórico de una parte muy importante de su paternidad.

No es infrecuente ya en textos de los mismos contemporáneos así como en la bibliografía posterior, apostillar a esta Declaración con el nombre de la Declaración de Robespierre.³⁷ Sin embargo imparcialmente y con los tres textos en la mano, el que propuso Condorcet el 15 de febrero, el que presentó Robespierre el 24 de abril y el que leyó Herault de Seichelles el 23 de junio y la Convención aprobó sin ninguna enmienda, tal aseveración no se sostiene fácilmente.

Veamos; quedó en primer lugar su personal decisión de retomar de la Declaración de 1789 la redacción de los artículos en materia penal, tomados como dijimos con gran exactitud de la Declaración de 1789 pero que Robespierre (¿significativamente?) omitió por entero en su proyecto. Quedó también, un artículo que había sido especialmente debatido en la última quincena de abril, el de la Libertad de Cultos, al que Condorcet había dedicado un artículo propio, el 6 y que la Declaración final incluyó bajo forma de inciso, es cierto, (Art. 7) pero idéntico en su redacción a la que propusiera Condorcet. También conservó la Comisión del Comité de Salud Pública una de las innovaciones del proyecto de Condorcet, llamada a tener una importancia mayor en el futuro de la Historia de los Derechos Humanos: la inalienabilidad de la persona (Art. 20 del Proyecto Condorcet que pasa a incluirse en el Artículo 18 del texto definitivo). La lucha contra la esclavitud había sido uno de sus ideales de filósofo y sobre todo uno de sus frentes más constantes de lucha desde los comienzos de la Revolución. En un determinado momento, había llegado a cambiarse el nombre, utilizando el término alemán, Schwartz, (negro) para identificarse más con la raza esclava por antonomasia en aquel siglo XVIII y en junio de 1789, en vísperas de reunirse los Estados Generales, había publicado un panfleto en el que pedía «se excluyese de ellos a quien tuviese esclavos ya que ello contradecía a los derechos naturales de los hombres».³⁸

De un modo muy particular permanecieron intocados sus artículos referentes a la propiedad privada que tanta polvareda habían levantado en el mes de abril. Dos meses después ya nadie se acordaba de las invectivas de Robespierre ni de sus planes de reforma social. Ni su mismo autor, a pesar de asistir y tomar parte muy activa como acabamos de ver en la discusión del Proyecto del Comité de Salud Pública. ¿Mero oportunismo revolucionario como lo interpreta A. Aulard?³⁹ ¿O cuando menos también visión política de un Robespierre plenamente identificado con las dos coordenadas que fijaban la existencia de aquella Declaración y subsiguiente Constitución que como hemos visto no eran otras que 1) alzarse con la victoria definitiva frente a los girondinos en uno de los frentes por ellos preferidos, el constitucional y 2) dar estatuto legal, cara al interior y al exterior, a un texto corto y provisional a sabiendas de que por encima de la Declaración de Derechos estaría siempre el Comité de Salud Pública y de que la Constitución nunca, como así sucedió, llegaría a aplicarse? Tema abierto, en todo caso, para la polémica entre robespierristas y antirobespierristas. Pero, en todo caso, la contradicción está ahí.

Pero hay más y aquí las cañas se van a tornar al fin lanzas contra Condorcet. En torno a su defensa de la propiedad (Artículo 21 de su Proyecto) y de su definición maximalista de la misma (Artículo 18, construyó Condorcet una miniteoría del naciente liberalismo económico que la Comisión del Comité de Salud Pública dejó pasar sin el menor retoque (Artículos 19 y 16 respectivamente de la redacción definitiva). En efecto, si aún hoy en día admitimos que la propiedad privada, la libertad de empresa y el régimen de libre contrato salarial constituyen los tres principios básicos del liberalismo económico, puesto en pie por la burguesía en su propio beneficio, en estos años finales del siglo XVIII observamos que estos tres mismos principios están perfectamente tipificados en los artículos 18-21 del Proyecto Condorcet y 16-20 de la Declaración final. Grave desviación la que recibían con ello los Derechos Humanos que por cierto ya habían conocido en las dos anteriores Declaraciones (Virginia y 1789) un escoramiento hacia los intereses de la burguesía, pero que ahora se agudiza mucho más y que salvando los tímidos intentos de los nuevos Derechos nacidos al calor de la revolución del cuarenta y ocho, sólo en el siglo XX, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y sus Convenciones anejas, hemos comenzado a rectificar.⁴⁰

A Condorcet se debieron también esos Derechos a la Educación y a la Asistencia Social (Arts. 23 y 24 de su Proyecto) que son tenidos hasta hoy como las dos principales aportaciones de la Declaración de 1793 a la Historia de los Derechos Humanos. Robespierre pasaría luego sobre ellos, como hemos de ver, reforzando las formulaciones de Condorcet. Pero la idea primera es de Condorcet; también la formulación exacta traspasada por el equipo de Herault de Seichelles al documento definitivo: «La instrucción es una necesidad para todos» (Art. 22) y «La asistencia social es una deuda sagrada» (Art. 23). Copió finalmente al pie de la letra, la Comisión de Salud Pública en su artículo 28, aquel Derecho a revisar la Constitución que Condorcet había propuesto como colofón de su Proyecto (Art. 33). Este principio hoy reconocido sin dificultad, representaba entonces una novedad. Se le quiso introducir a última hora en la Declaración de 1789, pero sin éxito. Condorcet desde una posición muy arraigada en su pensamiento, la de la perfectibilidad y constante progreso de la sociedad humana y sus instituciones la había ya defendido repetidas veces concretamente, en aquella «Profesión de fe patriótica» que redactara en junio de 1791, tras los sucesos de Varennes, esto es, cuando se había producido un hecho que desencadenaba la revisión de todo el primer planteamiento revolucionario.

La huella de Robespierre.

Pero hubo también, naturalmente, un espacio para Robespierre. E importante, como vamos a ver. A la altura de nuestro análisis, podemos aventurar la hipótesis de que Robespierre pasó por encima de los dos bloques hasta aquí analizados, dejando la huella de su personalidad

combativa y del radicalismo e integridad que caracterizaron su acción histórica.

Suyo es en primer lugar el Preámbulo del que prescindió Condorcet, yendo directamente al grano del articulado. Robespierre en cambio le daba una especial importancia y se sentía orgulloso de él. «La simple lectura del preámbulo, dijo, basta para animar a los amigos del pueblo y causar desesperación a los enemigos. Europa no tendrá más remedio, continuaba, que admirar el más bello monumento de la razón humana».⁴¹

En realidad lo que Robespierre hizo fue resumir aquel solemne y a la vez denso Preámbulo de la Declaración de 1789, añadiéndole, eso sí, al final, una coletilla de su propia cosecha que contenía dos principios fundamentales de su ideario político: la oposición a la tiranía (entendida desde su propia concepción) y el culto a la moral pública. La finalidad de los derechos humanos, dirá Robespierre, es que «los pueblos no se dejen envilecer por la tiranía» así como que constituyan un código de conducta moral para magistrados y legisladores: «El magistrado, leemos en las últimas líneas del Preámbulo, tendrá en ellos la regla de sus deberes y el legislador el objeto de su misión». La Comisión del Comité de Salud Pública asumió este resumen del Preámbulo del 89 hecho por Robespierre, aunque sintetizándolo todavía más, pero respetando las innovaciones dichas.

No fueron aceptadas como dijimos sus tesis sobre la propiedad y la exención de los más pobres del impuesto (Arts. 9-12 y 15 de su Proyecto). Pero en cambio y sin salirse propiamente de su programa de reformismo social, se le concedió aquel correctivo de radicalidad que ya en la sesión del 24 de abril quiso poner al excesivo principialismo de Condorcet en materia de Asistencia Social y Educación. La Asistencia Pública era para Robespierre algo más que «una deuda sagrada de la Sociedad»; debía encarnarse en reformas tan concretas como eran «proporcionar trabajo a todos los capacitados» y «subsistencia a los incapacitados para trabajar». Paralelamente, la Instrucción en manos de Robespierre desciende del principio de «una necesidad general» que es donde la había colocado Condorcet, al nivel algo más preciso de «colocar la instrucción al alcance de todos». Sendas enmiendas pasarían a los Artículos 21 y 22 del texto definitivo.

Diríase que a partir de estos dos artículos, Robespierre y su Proyecto se adueñan por un tiempo del contenido de la Declaración en su redacción final. El legado de 1789 y las aportaciones de Condorcet sólo aparecerán en los siguientes artículos, tímidamente, arrollados por una especie de vendaval populista y revolucionario del más típico cuño robespierriano. Veámoslo; cuando Robespierre decía desde la tribuna de la Convención «hay un pueblo de desarraigados inmenso, muy puro, vigoroso», tenía ya en su mente el que sería el Artículo 18 de su Proyecto en el que diría: «El pueblo es el soberano y el Gobierno su obra; los funcionarios públicos son los encargados de cumplir sus órdenes y el pueblo puede cuando le plazca cambiar su gobierno y revocar a sus mandatarios».⁴² La Comisión formada el 4 de junio sintonizó con esta pasión por el pueblo de Robespierre; sólo limó un tanto sus aristas. Y el resultado fueron esos Artículos 25, 29 y 31 en los que tras exponer con

los adjetivos más firmes el principio de la soberanía popular, pasa a reconocer su derecho a revisar la constitución y a ejercer un control sobre la conducta de sus Magistrados.

Más fielmente siguió todavía esa misma Comisión la pauta marcada por Robespierre en dos materias de permanente actualidad en aquel primer semestre de 1795, el Derecho de Petición y el Derecho a la Insurrección. Desde que el pueblo invadió la Asamblea en la jornada del 10 de Agosto de 1792 e impuso su voluntad a la entonces Asamblea Legislativa, se convirtió en un hecho cada vez más frecuente que contingentes numerosos, y a veces armados del pueblo de París, cercasen la Asamblea, mientras que un grupo se destacaba para ocupar las tribunas y, desde ellas, exponer/imponer sus peticiones a los Diputados. Detrás de esta actitud estaba el apoyo real que Robespierre le prestaba, y lo que aquí más importa, su ideario político. Para él, el pueblo tenía por razón de su misma naturaleza la clave de la verdad y el acierto político. «Por lo demás, diría en otro de sus célebres discursos, el pueblo no necesita de una gran virtud para amar la justicia y la igualdad; sólo necesita amarse a sí mismo».⁴³ Si el pueblo estaba asistido de este instinto político, era natural que no se requiera ninguna selección previa, como la que se efectuaba en las Asambleas Primarias, para ser protagonista y responsable de la Cosa Pública. Postura radicalmente opuesta a la del ala moderada de la Convención y muy particularmente de Condorcet quien no sólo cerró el paso en su Proyecto a este tipo de participación popular, sino que apenas conocido el texto final de la Declaración reaccionó vivamente contra esta concesión a la teoría populista-revolucionaria de Robespierre. «Llaman pueblo, dirá, a los hombres corrompidos o descarriados a los que juntan en grupos, a los que apilan en las tribunas, pero odian al pueblo soberano de las Asambleas Primarias, porque le temen...»⁴⁴

Robespierre en cambio llevará en su Proyecto la tesis contraria hasta su extremo. En primer lugar no hacía falta que las peticiones hechas a la Convención estuviesen respaldadas por un determinado número de peticionarios. Se trata, dice Robespierre (Art. 26), de un Derecho que pertenece a todo individuo. Además sus destinatarios, los Diputados, «habrían de fijar su contenido» sí, pero cuidado de no introducir ningún freno ni traba al ejercicio de este derecho. La Comisión presidida por Herault de Seichelles, tras suavizar un tanto su fondo, acogieron este derecho (Artículo 32), que conviene reconocer, así mitigado y desarrollado, hoy es plenamente reconocido en nuestra actual tabla de Derechos Universales. Y finalmente, el Derecho a la Insurrección. Robespierre lo desarrolló a placer en cinco densos artículos de su Proyecto (29-31) que respondían plenamente a su pensamiento y a la táctica política por él desarrollada en estos difíciles meses de la naciente Convención.

«La nación, había escrito Robespierre, no despliega verdaderamente sus fuerzas más que en tiempos de insurrección». Y en otra ocasión había llegado a añadir, para dar a entender que era consciente de los riesgos que comportaba su opción por esta vía de acción histórica: «si la violencia popular cometiese algunos errores, habréis de perdonársela, por los muchos siglos de servidumbre y miseria que ha sufrido».⁴⁵ La conclusión era clara.

No ya solo las peticiones verbales que emanaban del pueblo, sino sus movimientos espontáneos de fuerza, en cuanto nacidos de ese sano instinto popular, debían ser elevados a la categoría de Derecho fundamental, más aún de deber (ahora no rehuye Robespierre el término) de todo grupo social civilmente constituido. La Declaración final prescindió de los presupuestos teóricos, pero no quiso ni quitar ni poner una coma en su Artículo 29 con el que Robespierre sintetizaba su pensamiento en esta materia. Sería el Art. 35 del texto definitivo: «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada sector del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes».

Al llegar aquí se detuvieron las concesiones hechas por Herault de Seichelles y su equipo, al Proyecto de Robespierre; porque no recogieron ni siquiera de forma resumida aquella proclama contenida sobre la Fraternidad universal entendida como una cruzada contra «los reyes, los aristócratas y los tiranos» que con tanto entusiasmo había defendido en su intervención del 24 de abril y seguidamente plasmó nada menos que en cuatro artículos, los que cierran su Proyecto. Ni se dieron explicaciones ni Robespierre las pidió del en sí anómalo olvido.

Los últimos retoques del Comité de Salud Pública

Quedaba la aportación del Comité de Salud Pública. Forzosamente había de ser limitada. Todo estaba ya dicho y no se concedieron por lo demás mucho tiempo para dedicarse a desmontar lo ya construido en nueve meses de reflexión, proyectos y debates. La prisa les consumía. «Sería un crimen retrasarla un día más», declaró el portavoz de la Comisión Héault de Seichelles, el 13 de junio.⁴⁶ Y en un momento de su intervención del 23 de junio, «se le escapará» (valga la frase pero expresa bien la realidad) a Héault de Seichelles, el comentario de que la puesta a punto de la Declaración se había hecho en una noche.⁴⁷

Su principal tarea consistió en ensamblar sus diversas piezas, el bloque del 89, la aportación de Condorcet y las enmiendas y añadidos de Robespierre en el sentido que hemos expuesto y dar al conjunto esa redacción de artículo corto y preciso, que ya los contemporáneos atribuyeron a la pluma fácil de Héault de Seichelles. Sí que introdujeron con todo algunas innovaciones. Las más señaladas fueron dos: aquella frase «la meta de la sociedad es la felicidad (bonheur) común», añadida al comienzo del primer artículo, especialmente significativa, en cuanto que era la que abría el articulado y el artículo 27 por el que la oposición a la tiranía, se llevaba hasta sus últimas consecuencias, con la reivindicación del tiranicidio como derecho natural del hombre. «Todo individuo, se decía, que usurpe la soberanía debe de ser inmediatamente ejecutado por hombres libres». Bonheur (es mejor dejar así la palabra introducida) y Tiranía.

Un estudio cunatitativo sobre la frecuencia de lenguaje en los discursos políticos y escritos de este primer semestre de 1793, nos llevaría a la conclusión de que fueron las dos palabras más repetidas. Tres veces por

poner un ejemplo de la primera, aparece en único párrafo, aquel que encierra el discurso de Condorcet el 15 de febrero. Y por lo que hace a la palabra «Tiranía», recorrer la intervención de Saint Just el 24 de abril, supone encontrarse una y otra vez con este término analizado desde los más variados puntos de vista. «Todos los tiranos, comienza diciendo, tensan los ojos puestos en nosotros, cuando juzgábamos a uno de sus semejantes». Para seguir poco después: «Yo combato el pretexto utilizado por los tiranos, el de la violencia natural del hombre para dominarle...» Y ni siquiera en la Declaración de Derechos veía el remedio contra la Tiranía. «No basta, dice, con decretar los Derechos del Hombre; siempre es posible que un tirano se levante e incluso se arme con dichos Derechos contra el pueblo». ⁴⁹ ¿Fue él, miembro y además influyente de la Comisión quien introdujo esta variante en el texto final? Muy prosiblemente, aunque no tenemos pruebas documentales de ello.

Pero entremos algo más a fondo en el significado histórico de estos dos términos, «Bonheur» y «Tiranía», puesto que aquella generación de revolucionarios y concretamente los autores de la Declaración, tras cargarles de un nuevo contenido, concedieron a uno y otro una importancia mayor. El término «Bonheur» era ya de uso corriente en el lenguaje del siglo XVIII. Pero cuando los revolucionarios lo utilizan recrean por así decirlo la palabra. Y entienden por ella dos cosas: una felicidad basada en el cultivo de las virtudes y el disfrute de los placeres naturales, lejos por tanto de la corrupción y el lujo que habían sido su constitutivo indispensable bajo el desaparecido régimen, y una felicidad condicionada por la igualdad, que se extiende por tanto a todos los ciudadanos. «La virtud, proclamaría Robespierre, produce la «Bonheur», en tanto que la infelicidad (usa el término contrapuesto, «Malheur») sale del crimen, como el insecto, nace del seno de la corrupción». ⁵⁰ Pero había que dar un paso más desde esta perspectiva y en el contexto revolucionario. Había de ser la voluntad general la que delimitase el campo de esta virtud generadora de «bonheur». «No conoceréis, decía Condorcet, ni la paz ni la Bonheur, ni la misma libertad, si el pueblo no se somete a las leyes que él mismo se ha dado». ⁵¹ Ya la Bonheur era para nuestro filósofo de alguna manera la síntesis de todo el proyecto constitucional que en aquel momento les presentaba. La Montaña guardará íntegramente esta concepción. Recordemos que cuando J. Villaud-Barenne hizo, en la mañana del 23 de junio, aquella propuesta que Robespierre rechazó de una votación nominal sobre la Declaración de Derechos, la razón que dio fue «para que Francia entera sepa que yo fui de los que voté su Bonheur». ⁵²

Pero además la Bonheur entrañaba un sentido igualitario. La antigua felicidad, además de estar basada en la corrupción, era el patrimonio de unos pocos. La nueva Bonheur que aportaban los revolucionarios no se concebía si no era extendida a toda la población. «Tous a la même hauteur, voilà le bonheur», decía uno de los versos de La Carmagnole. «Esta nueva palabra, «Bonheur», ha escrito recientemente M. Ozouf, está indisolublemente ligada

a la igualdad. La buena legislación consistirá en la igual repartición de la «bonheur» entre todos los ciudadanos».⁵³

En cuanto a la reiteración del término Tiranía tiene por una parte su explicación en la fijación que se crea en los revolucionarios sobre la persona de Luis XVI, y a través de él de la monarquía absoluta como expresión y símbolo de la Tiranía. Una y otra vez se le acusará de tirano en el juicio que contra él entablan entre noviembre de 1792 y enero de 1793 y después de su ejecución, se vuelve de nuevo con frecuencia al mismo término, como justificación a un tiempo de la condena y muerte perpetradas y de la naturaleza del nuevo Régimen republicano que tiene en el rechazo a la monarquía/tiranía su razón histórica de ser.⁵⁴ Pero con clara lógica política, era también la tiranía, una vez desaparecido el régimen ancestral monárquico, la sombra que se cernía sobre aquella Revolución insegura de sí misma y amenazada desde el exterior y desde dentro del mismo territorio francés. En las mentes más lúcidas resonaban en aquella primavera de 1793 las palabras que Marat pronunciara en los primeros días de la Convención: «Creo que soy el primer escritor político y puede ser que el único en Francia después de la Revolución que ha propuesto a un tribuno militar, a un dictador, a un triunvirato, como medio único de aplastar a los conspiradores y a los traidores».⁵⁵ ¿Quién sería? Todos sospechaban de todos, en aquel verdadero arsenal de personalidades superiores, o simplemente ambiciosas, que se llamaban Danton, Robespierre, Dumouriez...; y J. Sièyes cerrará este discurso sobre la tiranía con su escueto veredicto en vísperas del 18 de Brumario: «Il faut une tête et une épée».⁵⁶

Así se comprende que ante tal situación generalizada, los distintos autores que a través de sus proyectos intervinieron en el texto final de la Declaración fueran dejando consciente o inconscientemente caer el término «tirano», «tiranía» en los distintos Artículos (en el texto definitivo se conservó la palabra misma en el Preámbulo y en los arts. 11, 14, 26 y en otros, por ejemplo en el 26 de forma indirecta) hasta desembocar en este Artículo 27 con el que se zanjaba el problema de forma a la vez decisoria y violenta; según él «el individuo que usurpe la soberanía debe ser inmediatamente ejecutado». La vieja tesis del tiranicidio entraba así, por un momento solo, en el depósito de los derechos fundamentales de la persona. Ninguna Declaración posterior se ha atrevido después a darle cabida.

Derechos Humanos y Constitución en 1793

Esta Declaración de Derechos Humanos de 1793 contribuye a aclarar un punto, bien que formal, importante en la Historia de los Derechos Humanos: el de su relación con el texto constitucional propiamente tal, al que sirve de pórtico. Parece claro, en un nivel de tipología de textos, que uno y otro pertenecen a géneros diferentes. Basta con observar el nivel de abstracción, más elevado en las Declaraciones de Derechos que en las Constituciones, sus mismas dimensiones, mucho más reducidas y consecuentemente con una densidad de contenido mayor en el caso de las primeras; aquella vocación de universalidad, en fin, que notamos más arriba, tan característica

de las Declaraciones de Derechos Humanos, contrasta con la inevitable parcelación de las Constituciones, en función del particular Estado y circunstancias del tiempo en que se redactan.

Sin embargo, un movimiento de natural afinidad impulsó a ambos documentos para que, desde sus mismos orígenes por cierto sincrónicos, caminasen hacia un mutuo encuentro. En modo alguno pensaron aquellos sencillos colonos de Virginia, que en junio de 1776 redactaron la primera Declaración de Derechos en la Historia, que diez años después los nacientes Estados Unidos iban a solicitar su inserción en la Carta Constitucional que regiría al nuevo Estado. Pero sucedió que conforme iban avanzando los Constituyentes reunidos en Filadelfia, en mayo de 1787, en la elaboración de su Carta Constitucional, les asaltaba una y otra vez la sospecha de si no estarían sobrepasando los límites de una ley superior, que enseguida relacionaron con los derechos naturales de la persona; fue fácil entonces traer a la memoria aquella serie de Declaraciones de Derechos Humanos que las diferentes Colonias habían aprobado en los comienzos de la rebelión contra Inglaterra, como justificación última y a la vez natural ante sí mismos y ante el mundo de su conducta. R. A. Rootland nos ofrece este apunte preciso «As the general frame of the constitution became more clearly discernible, the enormous power of the national government caused a small band of delegates to call for guaranties of personal liberty. Charles Pinkney submitted to the Committee of Detail on August 20, a list of propositions which amounted to a Bill of Rights».⁵⁷

Los miembros de la Asamblea Constituyente francesa se plantearon claramente el problema desde los comienzos mismos de la elaboración de ambos documentos. Mientras que algunos, como Sièyes, eran partidarios de que los Derechos Humanos tuvieran un desarrollo independiente y un puesto aparte en el organigrama político francés, otros, como Lafayette y Mounier, concibieron la Declaración de Derechos como el camino que era preciso recorrer primero, para resolver luego con más facilidad los múltiples problemas que habrían de plantearse al querer poner en pie todo un nuevo sistema de instituciones y reparto de las instancias de poder. Prevaleció esta tesis.⁵⁸ Pero ello no impidió el que la promulgación de Derechos se produjera independientemente, en la histórica fecha del 26 de agosto de 1789. Dato que admite esta lógica reflexión: aun en el caso de que los vaivenes políticos hubieran impedido el que la Constitución llegara a buen puerto, la Declaración de Derechos hubiera seguido en pie con su valor permanente, puesto por cierto en evidencia al situarla en el primer plano de las conmemoraciones bicentenarias.

En 1793 no se discute ya salvo alguna voz aislada si los nuevos Derechos Humanos constituirán o no, un documento independiente. Su inserción en el bloque constitucional es un legado más de la experiencia política que los Convencionales recogen de la primera Revolución. Pero tal vez por eso, ya sin problemas de fondo, se matiza mejor la diferencia entre ambos documentos. Todos, aquí sin diferencias de grupos, contribuyen a separar ambos textos. El diputado girondino J. M. Rouzet dirá en la sesión del 17 de abril: «estamos ante dos opiniones: que nos ocupemos

directamente de organizar el Gobierno o que entremos en una Declaración metafísica sobre la Declaración de derechos». Y subrayará: «la primera es la opinión de Buzot, la otra es la de Robespierre». ⁵⁹ Sí, Robespierre prefería centrarse en la Declaración de Derechos. Para él era lo importante. Fijémonos en que el día 24, contrariamente por cierto a Saint Just que ese día presentó ambas cosas, Declaración de Derechos y Constitución, Robespierre solo presenta la primera. Y no fue una omisión: era su criterio repetidas veces expresado. «Nuestra Constitución supera a la de los Romanos, que no conocieron los Derechos Humanos». ⁶⁰ Y cuando Héault de Seichelles trate de exponer el resultado de su trabajo, hará esta significativa distinción entre uno y otro documento: «El Comité de Salud Pública ha recibido el encargo de preparar una nueva Declaración de Derechos. Su primera reacción, continúa, fue redactarla en términos muy precisos, pero luego la encontraron demasiado seca». Y concluye: «Una Declaración de Derechos es distinta de una Constitución; tiene que ser más detallada para que la entienda todo el mundo...» ⁶¹ No se podía decir más claro.

Pero el texto de Héault de Seichelles nos explica por otra parte el particular estilo de esta Declaración, de párrafo corto y consecuentemente con numerosos artículos (la más larga de todas las de la historia, hoy ya bisecular, de las Declaraciones de Derechos Humanos). Fue una consecuencia de ese afán de claridad y de hacerla un documento plenamente asequible para el pueblo, su más directo destinatario, frente a la Constitución destinada a ser manejada por políticos. «La Declaración de Derechos-Pancarta», dirá de ella con burla Mme. Rolland en sus Memorias. ⁶²

De hecho y desde un punto de vista de procedimiento, uno y otro documento se expusieron separadamente ante la Convención en dos días separados. El 23 de junio fue el día por decirlo así de los Derechos Humanos. A él se dedicaron de lleno. La lectura, en cambio, de la Constitución y su breve discusión y aprobación, tuvo lugar al día siguiente, 24. Y que el pueblo asumió enseguida como algo muy propio el primer documento, lo prueban las numerosas intervenciones, varias de ellas provenientes de asociaciones populares, que se produjeron en un clima de euforia, tras la aprobación de la Declaración de Derechos el mismo día 23, al conocerse la noticia de que se había aprobado. Tomemos una, la de Pierre Chaumette, uno de los líderes de la Commune de París que servía de enlace entre el pueblo y la Convención: «El pueblo de París que rodea en gran parte vuestro recinto, ha encargado a tres magistrados que vengan a expresaros su reconocimiento». ⁶³

El destino histórico terminaría de confirmar esta dualidad. Mientras que la Constitución de 1793 nunca llegó a ponerse en práctica e históricamente se perdió en el olvido, los Derechos Humanos del 93 tendrían larga vida en la memoria de los herederos de la revolución que verían en ellos, despojados de sus concesiones burguesas y de sus extremismos revolucionarios, un hito indispensable en la Historia de las Declaraciones de Derechos Humanos que llega hasta nuestros días.

NOTAS

- ¹ Una puesta a punto de la Bibliografía sobre los Derechos Humanos en la Revolución Francesa que por otra parte creemos viene a confirmar nuestra doble afirmación, escasez relativa y fijación en la de agosto de 1789, puede verse en la reciente obra de A. de BAECQUE, W. SCHMALE y M. VOVELLE: *L'an I des droits de l'homme*. Presses du CNRS, Paris 1988. Algunos aspectos de la Declaración que nos va a ocupar en este artículo, la de 1793, han sido tratados por Lucien JAUME. Véase su obra más reciente, *Les Déclarations des Droits de l'Homme: Du débat 1789-1793 au Préambule de 1946*. Paris, Flammarion 1989.
- ² GAUCHET, M.: *Droits de l'homme. En Dictionnaire Critique de la Revolution Française*, Flammarion, Paris 1988, p. 685.
- ³ Concretamente esta Declaración parte de un menor aprecio del documento en cuanto tal, introduce desde el primer momento los deberes como elemento restrictivo de los Derechos y hace desaparecer por completos los Derechos Sociales. Véase *Les Constitutions de France depuis 1789* (Presenté par J. Godechot), Paris 1970, pp. 70 y ss.
- ⁴ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 14, p. 79.
- ⁵ BADINTER, E. y R.: *Concorcet. Un intellectuel en politique*. Fayard, Paris 1988, p. 540.
- ⁶ Archives Parlementaires, Tomo 64, pp. 417 y ss. AULARD, A.: *La société des Jacobins. Recueil des Documents*. Tomo 1, p. 46.
- ⁷ CAHEN, L.: *Condorcet et la Révolution Française*, Slatkine Reprints, Genève 1970, p. 467.
- ⁸ Cit. en BADINTER, E. y R., ob. cit. p. 380.
- ⁹ Aunque Condorcet no había sido Constituyente había enviado con todo algunos informes referentes a ella; por ejemplo, su *Adresse à l'Assemblée Nationale sur les conditions d'éligibilité*, donde prácticamente defiende el sufragio universal. OO. CC. Paris, Didot, 1897, p. 80. Sobre la dualidad, más que rivalidad, entre Sièyes y Condorcet, para presidir la comisión, véase P. BASTIDE: *Sièyes et sa pensée*, Hachette, Paris 1970, pp. 139-40.
- ¹⁰ Algunos autores de la época, como P. Durand-Maillane y recientes, como M. D. Conway, reducen el protagonismo de Condorcet en favor de B. Barère, Th. Paine y el mismo Sièyes. Véase L. Cahen, op. cit. pp. 468-9. Pero abundan muchos más y son más convincentes los testimonios que, supuestos los normales contactos, le atribuyen una autoría sin reservas. Barère dirá en sus memorias: «(Condorcet) auteur d'un projet de Constitution trop élevé dans ses vues...» T. IV, p. 165. Mme. Rolland también en sus Memorias llama sin más al Proyecto presentado el 15 de febrero, «el Proyecto Condorcet». T. 1, p. 155. Etc.

- ¹¹ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 14, p. 240. El mismo Condorcet estaba de acuerdo con la iniciativa. Así el 21 de octubre escribía en *La Chronique de Paris* de la que en esta etapa es su cronista político: «Antes de comprometerse en su plan de trabajo, el Comité de Constitución ha sentido que no estaba llamado a preparar un código de leyes solamente para Francia, sino para todo el género humano. Ha querido rodearse de las luces de todos los países y de todos los tiempos... Ha pensado que cualquier ciudadano que hubiese concebido o tuviese ideas nuevas sobre la organización social se convertía automáticamente en uno de sus miembros».
- ¹² Sobre la universalidad de la Declaración de Virginia, pese a haber nacido en un círculo tan restringido, véase PALMER, R. R.: «Les Droits de l'homme dans les États Unis. 1774-1789», en *XIV International Congress of Historical Sciences*, San Francisco 1975, pp. 43-48. Es más clara aún la voluntad de universalidad en la Decl. de 1789. Véase, entre otros textos, *Reimpr. de l'Anc. Moniteur*, T. I p. 261. Por lo demás todo el preámbulo de la Declaración de 1789 está embebido de universalidad.
- ¹³ *Archives Parlementaires*, Tomo 58, p. 596.
- ¹⁴ *Réimp. de l'Anc. Mon.*, Tomo 16, p. 216.
- ¹⁵ *Actes de la Société des Jacobins*, T. V, p. 29.
- ¹⁶ *A. de la Soc. des Jac.* T. V, p. 66.
- ¹⁷ PILPAIX (seudónimo de J. P. GALLAIS): *Révenant ou septième dialogue des morts de la Révolution entre Héroult de Seichelles et Condorcet*. (S. L. y S. A.), p. 132.
- ¹⁸ BARÈRE DE VIEUZAC, B.: *Memoires*. Paris, Labitte 1844, T. IV, p. 165.
- ¹⁹ ROLAND, Mme.: *Memoires*. Paris, Plon, 1905. T. 1, p. 272.
- ²⁰ *Arch. Parlem.*, T. 58 p. 625.
- ²¹ Lo atacan especialmente «Le journal des hommes du 14 juillet» y «Le Courier de l'Égalité». Defiende en cambio a Condorcet y su Proyecto «Le Patriote français», órgano de Brissot. Véase CAHEN, L.: ob. cit., pp 469 y ss.
- ²² *Réimp. de l'Anc. Mon.*, Tomo 6, p. 729.
- ²³ *Actes de la Société des Jacobins*, T. V, p. 32.
- ²⁴ *Arch. Parlem.*, T. 62, p. 193.
- ²⁵ *Arch. Parlem.*, T. 62, p. 278.
- ²⁶ *Arch. Parlem.*, T. 62, p. 277.
- ²⁷ *Actes de la Société des Jacobins*, T. V, pp. 137-8.
- ²⁸ Robespierre, *Discours et rapports à la Convention*, Union Général d'Éditions, Paris 1965, p. 117.

- 29 AULARD, A., *Histoire Politique de la Révolution Française*. Paris, Armand Colin, 1913, p. 295.
- 30 CAHEN, L.: Ob. Cit., p. 517.
- 31 Sus nombres, dos miembros de aquella comisión alternativa formada el 18 de febrero en el seno del club de jacobinos: Saint Just y Couthon, el brillante Herault de Seichelles, el que presidiría la Convención en las jornadas del 30 de mayo y dos de junio, más dos jacobinos de menor relieve, R. Ramel y J. B. Mathieu. Como es sabido, Robespierre no formaba parte en este momento del Comité de Salud Pública.
- 32 BARÈRE DE VIEUZAC, B.: *Memoires*, T. 11 p 109.
- 33 *Adresse aux citoyens égarés de quelques Departements. La Société des Jacobins. Recueil des documents*. T. V, p. 258.
- 34 *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 16, p. 729.
- 35 *Lettre Aux citoyens français sur la Nouvelle Constitution*, en OO. CC. Tomo XII, Paris Didot, 1847, p. 663.
- 36 Arch. Parlem. T. 62 p. 278-9.
- 37 El mismo *Ancien Moniteur*, en su reimpresión, al ofrecer el texto aprobado en la sesión del 23 de junio, dice: «Il est facile de s'apercevoir que cette Declaration des Droits de l'Homme a été calquée sur celle redigée et présentée a la Convention par Robespierre. On y retrouve les mêmes principes; quant à la redaction elle n'a subie que légères modifications».
- 38 Cit. en BADINTER, E. R., ob. cit., p. 293.
- 39 «Robespierre y los jacobinos, dice A. Aulard, fueron tan lejos en materia social no porque quisieran realmente llevar a cabo una reforma radical de la sociedad, sino por táctica política y la prueba está en que una vez vencedores de los Girondinos, cuando fueron dueños de que prevaleciesen sus ideas, renunciaron a ese socialismo». AULARD, A.: *Histoire politique de la Révolution Française*, Paris, Armand Colin 1913, p. 291 (28).
- 40 VERDOOT, A.: *Naissance et signification de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme*. Louvain, Nauwelaerts, 1965, pp. 170 y ss.
- 41 *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. XVI, p. 728.
- 42 *Robespierre, Discours et Rapports à la Convention*. p. 138.
- 43 *Robespierre, Discours et Rapports à la Convention*. p. 133.
- 44 CONDORCET, M. A.: *Lettre aux citoyens français sur la Nouvelle Constitution*, en OO. CC. Tomo 12, Paris Didot, 1847, p. 663. Cit. en COBBAN, A., ob. cit, p. 164.

- ⁴⁵ Cit. en COBBAN, A.: *Aspects of the French Revolution*, London, Paladin 1971, p. 164.
- ⁴⁶ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 16, p. 730. Expresa la misma idea de elaboración precipitada en ambos documentos (Derechos Humanos y Constitución), un testimonio directo de Herault de Seichelles, recogido por P. Ch. BAUDIN en: *Anecdotes et réflexions générales sur la Revolution Française* (s. l. s. f.) p. 20.
- ⁴⁷ Esta misma acusación de improvisación aparecerá en la conversación que mantienen Herault de Seichelles y P. Ch. Baudin, de acuerdo con el relato de este último: «toda la obra (habría que entender aunque parezca exagerado, Declaración de Derechos y Constitución) la hice en una cena con otro compañero de comisión. En BAUDIN, P. Ch.: *Anecdotes et réflexions générales sur la Revolution Française*, p. 18.
- ⁴⁸ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 16, p. 472.
- ⁴⁹ BARÈRE, B. *Memoires*, p. 109.
- ⁵⁰ COBBAN, A., *The fundamental ideas of Robespierre*, en *Aspects of the French Revolution*, p. 139.
- ⁵¹ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 16, p. 472.
- ⁵² Arch. Parlem. T. 67, p. 108.
- ⁵³ OZOUF, M., «Egalité», en *Dictionnaire Critique de la Revolution Française*, p. 699.
- ⁵⁴ Ya en las primeras palabras del proceso, iniciado en 11 de diciembre de 1792, el Presidente de la Convención aquel día, que era B. Barère, dirá: «Louis, le peuple français vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes pou établir la tyrannie...» Otros ejemplos en SOBOUL A.: *Le procès de Louis XVI*, Paris, Julliard 1966.
- ⁵⁵ Cit. en SOBOUL, A., *La Revolución Francesa*. Tecnos, Madrid 1975, p. 208.
- ⁵⁶ BASTID, P.: Ob. cit. p. 231.
- ⁵⁷ RUTLAND, R. A., *The birth of the Bill of Rights. 1776-1791*, Northeastern Univ. Press, Boston 1983 p. 113.
- ⁵⁸ Puede verse entre otros pasajes, *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. I, pp. 276-277.
- ⁵⁹ Arch. Parlem. T. 62, p. 276.
- ⁶⁰ Cit. en MATRAT, J.: *Robespierre ou la tyrannie de la majorité*, Hachette, Paris 1971, p. 258.
- ⁶¹ *Réimpression de l'Ancien Moniteur*, vol. 16, p. 729. Como un dato significativo más de la distinción entre ambos documentos, cuando en la sesión del 18 de junio

Herauld de Seichelles solicitó que Derechos Humanos y Constitución fuesen gravados en público en la sala de sesiones y en las plazas, un diputado del que no se nos da el nombre solicitó este honor solamente para la Declaración de Derechos y por el momento así fue aprobado. Arch. Parlem. T. 66, p. 282.

⁶² ROLAND, Mme.: *Memoires*. T. II, p. 303.

⁶³ *Reimp. Anc Mon.* T. 16, p. 729.

NAZARIO GONZÁLEZ

Catedrático de Hª Contemporánea en la U.A.B.

Resumen: el autor justifica este artículo aduciendo la falta de estudios sobre las Declaraciones de 1793 y 1795 en relación a la de 1789, sobradamente conocida. Para subsanar esta situación, realiza el profesor González una aproximación a nivel histórico-morfológico y formal. A su vez fija las relaciones entre Declaración de Derechos y Constitución.

Summary: The author justifies this article adducing the absence of studies about the human rights statements of 1793 and 1795 in relation to the famous and well-known of 1789. In order to make-good this situation, professor González makes an approximation to the Statement of 1793 reflected in three levels: historical, morphological and formal. It would say, seeing this statement as an introduction to the Constitution of the same year.